

Silencios que aturden



EDWIN
PALMA EGEA
Exministro de
Minas y Energía

El 14 de octubre, miles de personas salimos a las calles en las principales ciudades del país. Marchamos por primera vez contra el gobierno de **Abe-lardo de la Espriella**: juventudes,

trabajadores y tra-

bajadoras, maestros y organizacio- nes sociales llenamos las plazas. Lo seguiremos haciendo.

Se notó, y mucho, la ausencia de la *Unión Sindical Obrera*. La *USO*, que desde 1923 ha sido la voz más firme del movimiento obrero colombiano, no estuvo. Y su ausencia se suma a una cadena de silencios que, puestos uno al lado del otro, se convierten en un grito.

Empecemos por casa. Durante siete décadas, la *USO* exigió que *Ecopetrol* fuera dirigida por gente que conociera la industria. Hoy la preside **Joaquín Gutiérrez**, viejo amigo del presidente –fue subgerente de su firma de abogados– y gerente de su campaña, sin experiencia conocida en hidrocarburos ni en energía. ¿La respuesta de la *USO*? Votar a favor de su elección en la junta y desearle éxitos.

Calló de nuevo cuando la junta puso al frente de las compras de *Ecopetrol* a **Camilo Rojas**, exvice-ministro de Política Criminal del gobierno Duque y abogado de **Diego Marín**, alias “Papá Pitufo”, señalado como el zar del contrabando. Cuestionado por esa defensa, respondió: “Yo ejerzo mi profesión”. Tiene razón: defender no es delito. Pero ¿quien defendió al contrabandista más poderoso del país es la persona indicada para decidir a quién le compra la principal empresa pública?

Tampoco dijo nada cuando **Carlos Suárez**, socio de **De la Espriella** y estratega de su campaña, sin trayectoria en el sector, llegó a la presidencia de la junta. Cuando *La Silla Vacía* y *Cambio* investigaron sus vínculos con una minera ligada a **Serafino Iacono**, los llamó “portales activistas” y advirtió que “los actores políticos reciben respuesta política”. La *Flip* tuvo que recordarle que “la prensa no se convierte en adversaria del gobierno por investigarlo”. Que eso se diga desde la junta de *Ecopetrol* es grave. Que su principal sindicato calle, también.

La *USO* ha callado incluso en de- rechos humanos, pese a sus más

de 100 líderes y afiliados asesina- dos. El 2 de septiembre, la Juris- dicción Especial para la Paz imputó al capitán (r) José Eduardo Gonzá- lez Sánchez, exsubjefe de seguri- dad de *Ecopetrol* en Barrancaber- meja, mi ciudad, por su papel en la toma paramilitar de 1998 a 2000, la de las masacres de mayo de 1998 y febrero de 1999. La JEP se- ñaló que la *USO*, una organización civil, fue uno de los objetivos estra- tégicos de esa alianza entre fuerza pública y paramilitares, y que des- de la empresa se manipuló la con- tratación para infiltrar el sindicato. En ese contexto, la nueva dirección tendría listo como gerente de Segu- ridad Física al general (r) Eduardo Zapateiro, acusado por la Fiscalía de presunto acoso sexual contra dos subordinadas. El sindicato no ha pedido explicaciones.

Tampoco habló cuando el Conse- jo de Estado obligó a una corporación de juntas comunales de Chichimene (Meta) y a su exrepresentante legal, Sandra Patricia Ruiz, a responder con su patrimonio por unas protestas de 2017 en las que reclamaban empleo. Es una advertencia para cualquier co- munidad petrolera que proteste, en medio de la violencia: el 22 de sep- tiembre asesinaron a Rafael Julián

Rodríguez Quiroz, presidente de Aso- juntas de El Centro, corazón petrole- ro de Barrancabermeja.

Mientras tanto, el gobierno ex- pidió el Decreto 1525, que endure- ce la intervención de la fuerza pú- blica en la protesta y que, a mi jui- cio, es inconstitucional. Y anunció un estatuto antiterrorista que, ad- vierten la oposición y varios juris- tas, permitiría señalar como terro- ristas, sin condena, a quienes pro- testan. En Taganga, una gerente de *Ecopetrol* acusó de extorsión a pes- cadores que exigen consulta pre- via por el proyecto Sirius; el mi- nistro del Interior, Rodrigo Lara, repitió la acusación y un juez le ordenó retractarse. De nuevo, el ruidoso silencio de la *USO*.

Callada también ante el desmon- te del trabajo decente. El *Ministerio del Trabajo* derogó de un plumazo 11 circulares; cuando el Consejo de Estado suspendió el decreto de ne- gociación colectiva por rama, se li- mitó a “tomar nota”, y días después publicó ocho proyectos de decreto para modificar o derogar normas que protegen a trabajadores y sin- dicatos. Fenalco, a su vez, insiste en anular el decreto del salario mí- nimo. La ministra **Natalia López** y su viceministra **Juliana Morad** no

tienen otra agenda que deshacer lo avanzado. Es la agenda laboral más regresiva desde 1990, y el sindicato más emblemático del país mira para otro lado.

Hay silencio también frente a la política fiscal. El presidente elimi- nará el impuesto al patrimonio, el que pagan quienes más tienen, y la plata tendrá que salir de otro lado. El exministro Mauricio Cárdenas ya propuso que *Ecopetrol* venda su par- ticipación en ISA, y el ministro de Ha- cienda, **Miguel Gómez**, no cerró la puerta a vender 8,49% de la empre- sa que la ley aún permite. La *USO*, que en 2019 anunció una huelga ante la sola idea de esa venta, no ha dicho una palabra. Ni reclama que las pe- troleras aporten de sus ganancias a la transición, a los subsidios de ener- gía o a los territorios.

Mucho silencio, pero no total. Sobre el fracking sí hay ruido: ahí parte de la dirigencia de la *USO* reaparece, se reúne con el presi- dente y declara su apoyo, aunque su *Asamblea Nacional de Delegados* mantiene el mandato del no al fracking. Hoy los micrófonos no se le abren a la *USO* para denunciar violaciones de derechos humanos o laborales, sino para explicar por qué el país debe hacer fracking.

Ese ruido dice más que todos los silencios juntos: la agenda de un amplio sector de la dirigencia terminó coincidiendo con la de un gobierno y una dirección de *Eco- petrol* que en todo lo demás le son hostiles. Defender la industria, el empleo petrolero y la soberanía energética es legítimo, y la *USO* lo ha hecho mejor que nadie durante un siglo. Pero se puede hacer sin entregarle el sindicato a la agenda antiderechos de la extrema dere- cha que hoy gobierna.

No escribo desde la orilla del adversario, sino desde el respeto por una organización que logró para el pueblo colombiano algunas de sus mayores conquistas: la de- fensa del petróleo como patrimo- nio público, la creación de *Ecope- tro*, la resistencia frente a una violencia que quiso exterminarla. Por eso su silencio duele y aturde.

El país necesita un sujeto colec- tivo capaz de disputar la “batalla cul- tural” que lanzó el nuevo gobierno, cuyos protagonistas hoy dirigen *Eco- petrol*. La *USO* puede volver a serlo, pero tiene que romper el silencio. A su base –los trabajadores de Barran- cabermeja, de los campos, de los oleo- ductos y de las refinerías– le corres- ponde exigirlo. Ojalá no sea tarde.